

En el Tumaco de Colombia, la guerra no ha terminado, apenas está comenzando

Han transcurrido casi tres años desde que un acuerdo de paz tan aclamado puso fin al conflicto de más larga duración en el hemisferio occidental. Dígame eso a la gente de Tumaco, donde la tasa de homicidios es cuatro veces mayor que el promedio nacional de Colombia y los choques violentos han desplazado a por lo menos 2.700 personas en 2019.

Muchos en Tumaco tenían grandes esperanzas del acuerdo firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, en 2016. Al abarcar una pequeña ciudad portuaria del Pacífico y una franja del sudoeste de Colombia cerca de la frontera con Ecuador, el municipio vio algunos de los peores de los 52 años del conflicto armado del país.

Durante décadas estuvo bajo el control de las FARC, quienes aterrorizaron a los tumacoanos y convirtieron a la región en gran parte rural en uno de sus centros de producción de cocaína más importantes. Cuando el movimiento guerrillero se desmovilizó en 2017, los habitantes de Tumaco creían que habían sido liberados del gobierno de un grupo armado brutal e ilegal.

Pero los tumacoanos dicen que ahora se sienten privados de sus posibilidades de paz. Es posible que las FARC se hayan ido, pero otros grupos armados ilegales están tomando su lugar, grupos llamados "disidentes" - y los miles de desplazados están recibiendo poca asistencia humanitaria.

Los disidentes son responsables de los peores niveles de violencia en Tumaco desde 2014, dos años antes de la firma del acuerdo de paz, y su proliferación es tanto una indicación como una consecuencia del proceso de desmovilización defectuoso que las FARC están atravesando en la región.

A diferencia de las FARC, los disidentes no tienen ideología política. Su único propósito es obtener el control del comercio de drogas enormemente rentable de Colombia. Como el principal productor de coca del país, la base de la cocaína, Tumaco es el imán número uno del país para los disidentes.

El gobierno ha desplegado alrededor de 9.000 militares en Tumaco en un esfuerzo por combatir a los grupos armados ilegales. Pero la falta de presencia de otras instituciones estatales, como los tribunales y las fiscalías, ha permitido a los grupos armados ejercer el control sobre la población.

El Tribunal Constitucional de Colombia ha descrito su creciente presencia en la región como una "crisis humanitaria", y un informe de Human Rights Watch en diciembre dijo que "en ningún otro lugar de Colombia hay violencia sexual por parte de grupos armados tan generalizados".

La Guerra de los disidentes

Los grupos disidentes de Tumaco incluyen el Frente Oliver Sinisterra (FOS), que se hizo famoso cuando secuestró y mató a tres periodistas Ecuatorianos el año pasado, y Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). Ambos tienen vínculos con los carteles mexicanos, de quienes dependen para exportar cocaína.

Hasta el año pasado, estos dos grupos lucharon entre sí por el control de Tumaco urbano, un lugar estratégico en las rutas de comercio de drogas de la región. Se establecieron en muchos de los barrios de la ciudad y establecieron lo que Human Rights Watch llama "Fronteras invisibles". Los residentes sabían que serían asesinados si se atrevían a cruzarlos.

Durante su contienda, la tasa de homicidios de Tumaco fue la más alta en Colombia - se informó que 245 personas murieron el año pasado, más que las 210 de 2017. Los cuerpos aparecerían flotando en ríos y estuarios. Sicarios, o hitman, recorrían la ciudad descaradamente en sus motocicletas, y sus armas eran visibles para cualquiera que se atreviera a mirar, según los residentes.

La policía rara vez se ve. En cambio, los disidentes se han convertido en las autoridades. Incluso han creado su propio sistema de justicia.

Cuando un Tumacoano de 26 años robó una panadería el año pasado, los disidentes lo asesinaron. Sus familiares dicen que su cuerpo fue encontrado dentro de una canoa en un estuario con cerca de 50 heridas de bala y un letrero en su pecho que decía "por robar y escabullirse".

La guerra entre el GUP y el FOS se resolvió hacia fines del año pasado cuando los dos grupos decidieron formar una alianza para intentar tomar el control de las áreas de los ríos Mira y Rosario, donde se encuentran muchos laboratorios de pasta de coca.

El territorio está controlado por otro grupo disidente liderado por Mario Lata, dice Uberley Ramírez, un abogado y activista social que tiene contacto regular con los grupos disidentes.

Desde entonces, la ciudad de Tumaco ha experimentado una calma inusual. La gente sigue desapareciendo, pero en silencio, dice Ramírez. Los residentes ya no escuchan balas disparadas en medio de la noche.

Pero mientras las cosas pueden haber mejorado en la ciudad, la violencia está aumentando en las zonas rurales de Tumaco a medida que el FOS y el GUP se enfrentan a los hombres de Lata. 2019 ya ha visto al menos cinco desplazamientos masivos.

Los activistas de derechos humanos y los líderes civiles locales dicen que el número de personas desplazadas el 16 de enero es mucho más alto que el recuento oficial de 785, cerca de 1.600, y acusan a la Oficina del Alcalde de realizar un recuento defectuoso. Otros acusan a los funcionarios locales y las fuerzas armadas de tratar de reducir intencionalmente la escala de lo que está sucediendo para que no tengan mala prensa.

El alcance de la crisis de Tumaco se está viendo ahora en los números que cruzan la frontera con Ecuador. Sólo el 3 de marzo, 275 personas de la zona rural de Tumaco cruzaron en busca de refugio después de los enfrentamientos entre el FOS y otro grupo armado liderado por un hombre que lleva el nombre de "Contador" ("El Contador?").

Aunque son técnicamente nuevos, en esencia se diferencian poco de las FARC, ya que sus miembros alguna vez pertenecieron al grupo guerrillero ahora extinto. O rechazaron o se desilusionaron con el acuerdo de paz y levantaron las armas una vez más.

Los disidentes han aumentado en número y se dirigen a antiguos compañeros que hasta ahora se han adherido al acuerdo de paz, con la esperanza de volver a recurrir a las armas, el tráfico de drogas y la violencia.

Además, la llamada "zona de transición" de Tumaco - donde los combatientes desmovilizados de las FARC viven en áreas protegidas por el ejército para capacitarse y, supuestamente, reintegrarse nuevamente en la sociedad - pronto será desmantelada. El temor es que esto podría llevar a más ex miembros de las FARC a unirse a las filas disidentes, a veces sólo para evitar ser asesinados.

Los desaparecidos

Al menos 63 Tumacoanos fueron declarados víctimas de desaparición forzada en 2018, a la par del año anterior, pero 70 por ciento más que en 2016. Human Rights Watch dice que los números reales son probablemente mucho más altos ya que la mayoría de los Tumacoanos tienen demasiado miedo de los disidentes y son demasiado desconfiados de las autoridades para denunciar la violencia. Tome a Andrea Garzón. Nunca informó sobre la desaparición de su hermano, lo que ocurrió el 16 de noviembre de 2018. Ella y sus padres comenzaron a buscarlo después de que no regresó a casa como de costumbre desde su turno de trabajo. Preocupado de que pudiera haberse topado con uno de los grupos armados que vagaban por su pequeña ciudad en Tumaco, lo buscaron hasta bien entrada la noche, sin éxito.

Temprano a la mañana siguiente, un hombre desconocido apareció en su puerta. "No lo busques más", dice Garzón, cuyo nombre ha sido cambiado por razones de seguridad, recuerda al hombre diciendo. "De lo contrario, todos acabarán muertos?."

Los Garzón estaban tan asustados que lloraban escondidos, llorando sólo dentro de su propia casa.

"Ya ni bailamos ni cantamos?."

Sin nadie a quien recurrir, los Tumacoanos viven con miedo. Garzón dice que los únicos que celebran algo son los grupos armados. "Ya ni bailamos ni cantamos", dice ella.

Garzón no sabe exactamente quién "desapareció" a su hermano, pero está segura de que quien sea, pertenece a un grupo disidente. A nivel nacional, se estima que 2.000 ex combatientes de las FARC se han unido a las filas de los disidentes, e inteligencia militar apunta a la presencia de al menos tres grupos disidentes distintos que operan en Tumaco.

Una desmovilización defectuosa

Según fuentes cercanas a los esfuerzos de desmovilización - quienes hablaron con The New Humanitarian bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de estos temas - la secretaría nacional de las FARC tiene al menos parte de la culpa por el fracaso del proceso en Tumaco. En particular, culpan a los líderes de las FARC por elegir a uno de los comandantes nacionales más visibles del grupo, conocido como Romaña, para liderar inicialmente la zona de transición aquí.

A diferencia de la mayoría de los hombres y mujeres de las FARC en Tumaco - la mayoría de los cuales son indígenas o negros - Romaña es blanco, rara vez ha pisado la región y es descrito por ex compañeros como aburrido y despótico.

Rodrigo Angulo, ex miembro de la antigua rama de la milicia de las FARC en la zona urbana de Tumaco, dice que Romaña y sus hombres "nos discriminaron porque éramos negros y porque éramos urbanos". Algunos comandantes de nivel medio que no se llevaban bien con Romaña abandonaron rápidamente el proceso de desmovilización junto con sus seguidores y formaron grupos disidentes.

Pero hay un montón de culpa para repartir, especialmente por no reintegrar a los ex combatientes y atender sus necesidades mientras luchan por construir nuevas vidas.

Por un lado, la zona de transición de Tumaco carece de agua potable. Una enfermera visita sólo unas pocas veces al mes, no lo suficiente como para satisfacer las necesidades médicas de todos, dice Fabio Hernando Areyano, alias Peter, el líder actual de la

zona. "Todavía tengo que ver la primera prótesis para nuestros hombres heridos", añade.

Los ex combatientes de las FARC en esta zona de transición - una de las 24 en todo el país - han tratado de ganarse la vida lanzando proyectos agrícolas, como las plantaciones de piña y aloe vera. Pero les falta el dinero y la formación para mantener vivos los proyectos.

"Queremos trabajar, pero necesitamos ayuda para generar empleo", dice Peter. "Necesitamos capacitación aquí para no tener que regresar a la coca o a la jungla", agrega - es decir, la guerra de guerrillas cuando dice jungla.

La gente aquí tiene miedo de lo que podría venir en agosto, cuando finalice el contrato de arrendamiento de la zona de transición de Tumaco. Aún no está claro si el gobierno y las FARC lo renovarían. Si no lo hacen, los miembros desmovilizados de las FARC en Tumaco no sólo perderán sus hogares durante los últimos dos años, sino también la protección que los soldados les otorgan de los grupos disidentes.

Ahora desarmados, los ex combatientes de las FARC temen que sin protección serán atacados y asesinados por los disidentes. "En el momento en que estos soldados se vayan, saltaré al vehículo con ellos", dice Peter.

Sin la capacitación y la reintegración adecuadas para darles otras oportunidades, muchos podrían volver a hacer lo único que saben hacer: la guerra.

Ignorando a los desplazados

Los grupos disidentes de Tumaco se enfrentan en una batalla mortal por el control de las rutas de narcotráfico que dejaron las FARC atrás. Las confrontaciones entre ellos han obligado a más de 2.700 personas a abandonar sus hogares en el municipio de Tumaco solo este año.

El mayor desplazamiento individual tuvo lugar el 16 de enero, cuando al menos 785 personas abandonaron sus hogares cerca de los ríos Mira y Rosario y buscaron refugio en la ciudad de Tumaco. Las orillas de estos ríos están salpicadas de plantaciones de coca y laboratorios de cocaína, y sus aguas son una ruta importante a través de la cual la cocaína sale de Colombia.

La ley Colombiana obliga a las autoridades locales a brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas y registrarlas en la Unidad de Asistencia y Reparación de Víctimas, UARIV, que es responsable de sus necesidades a largo plazo.

Pero la Oficina del Alcalde de Tumaco está acusada de no cumplir con sus obligaciones con los desplazados, a menudo colocándolos en un estadio de fútbol abarrotado donde tienen que dormir en el piso. La ayuda humanitaria suele llegar tarde, si es que llega.

"Las autoridades de Tumaco han fallado en brindar asistencia adecuada a las víctimas de desplazamientos cuando huyen de sus hogares", dice José Miguel Vivanco, Director de la división de las Américas de Human Rights Watch.

Sin lugar para quedarse, las personas desplazadas buscan la hospitalidad de conocidos o familiares que se mudaron a la ciudad de Tumaco hace años. Por lo general, sus casas son chozas de madera sobre pilotes punzantes que se extienden hacia el mar.

"En un hogar de 10x10 (-metros), generalmente encontramos hasta cinco familias durmiendo en el piso", dice un trabajador humanitario en Tumaco que prefería no dar su nombre. Estas casas no tienen albañales, agua corriente ni electricidad. Y los desplazados del campo luchan por encontrar trabajo en una ciudad con un 74 por ciento de desempleo.

Los mismos grupos que los desplazaron del Tumaco rural tienen milicias urbanas en la ciudad de Tumaco. Amenazan a cualquiera que habla abiertamente sobre las razones de su desplazamiento. La violación y otros tipos de agresión son comunes entre la población desplazada de Tumaco.

Edilberto Clevel, una de las víctimas del desplazamiento masivo que tuvo lugar el 16 de enero, dice que la Oficina del Alcalde trata a las personas desplazadas como una papa caliente. "Es un desastre", dice. "El Alcalde está en prisión, el Alcalde a cargo dice que no somos su responsabilidad, y los que él dice que están a cargo dicen que no tienen recursos para ayudarnos?".

"Prefieren recibir un disparo que morir de hambre en Tumaco?".

Las autoridades no pueden hacer un censo de los desplazados y recopilar información de manera oportuna. Esto a su vez retrasa la asistencia humanitaria.

Las Agencias de ayuda internacional sólo deben responder cuando las autoridades recopilan los datos y solicitan su ayuda. Por lo tanto, las ONGs tienen que omitir el protocolo, entregar alimentos y medicamentos a los que consideran más necesitados.

"Vemos una semana, pasan dos semanas y la situación no queda clara", dice un trabajador de una ONG que solicita el anonimato porque teme que las autoridades tomen represalias al finalizar su colaboración con su organización. "Por lo tanto, debemos priorizar la salud de la población [desplazada] y su cuidado, al menos en términos de salud?".

Dado que las personas a menudo se encuentran peor en la ciudad de Tumaco que en la región rural de la que huyeron, no es de extrañar que muchos opten por regresar, a pesar de la violencia. "Preferirían recibir un disparo antes que morir de hambre en

Tumaco", explica el trabajador de la ONG.

Clevel tiene que ir y venir entre su casa en la región del río Rosario y la ciudad de Tumaco, ya que los enfrentamientos esporádicos entre el grupo armado estallan y desaparecen. Él está acostumbrado a nunca sentirse seguro, y la tensión es evidente.

"Hay un límite a la cantidad de hambre que una persona puede soportar", dice. "Río Rosario está pasando por cada momento feo que ha existido. Los grupos armados tienen bombas, granadas, viseras, chalecos [blindados], todo eso", agrega, señalando que están tan bien equipados como el ejército.

Un conflicto reciclado

Es difícil obtener cifras exactas, pero se cree que las mujeres en Tumaco soportan la tasa más alta de violencia sexual en cualquier municipio de Colombia.

Al menos 74 mujeres informaron haber sido violadas o agredidas sexualmente en 2017 y 2018, pero Human Rights Watch dice que el número real de casos podría ser mucho mayor, ya que la mayoría de las víctimas en lugares como Tumaco nunca lo denuncian. Por ejemplo, Luisa Ochoa, de 28 años de edad, nunca le contó a las autoridades las varias veces que fue violada. La última vez que fue agredida, en 2017, dos hombres armados la agarraron por la espalda mientras estaba parada frente a un club nocturno. La metieron en un taxi y la llevaron a una casa remota que ella cree que estaba ubicada en algún lugar de las afueras de la ciudad de Tumaco. Ella no sabe exactamente dónde, ya que estaba con los ojos vendados en el camino.

"Me ataron a una cama, me quitaron la ropa y abusaron de mí durante ocho días", dice Ochoa, cuyo nombre real ha sido cambiado por razones de seguridad. Nunca supo quiénes eran sus captores - siempre llevaban pasamontañas - pero está segura de que formaban parte de los grupos armados ilegales que controlan la ciudad de Tumaco.

Cuando terminaron con ella, la dejaron, debilitada y angustiada, en el mismo lugar donde la encontraron. Pasó varios días en un hospital, donde descubrió que estaba embarazada. Ella eligió no tener el bebé.

"No es nada menos que un milagro si una mujer (víctima de violencia sexual) alguna vez recibe la ayuda?".

Por ley, se supone que el estado Colombiano otorga a las víctimas de violencia sexual viviendas temporales, transporte e incluso comida. Pero Ochoa nunca recibió tal ayuda.

"No es nada menos que un milagro si una mujer (víctima de violencia sexual) alguna vez recibe la ayuda", dice Vivanco, de Human Rights Watch. Ochoa intentó suicidarse después de que fue secuestrada. Aunque están obligados a hacerlo, las autoridades nunca le brindaron ayuda psicológica. Pero ella tuvo suerte. Otra víctima de violencia sexual la llevó a Médicos Sin Fronteras, donde un psiquiatra le dio una nueva voluntad de vivir.

A pesar de la gran presencia militar en Tumaco, la violencia de la región se está saliendo de control con cada mes que pasa.

Mientras miles de soldados patrullan el único camino que conecta a Tumaco con el resto del país, los disidentes están atravesando la selva para crear nuevos senderos a través de los cuales ellos pueden transportar coca.

Aparte de las fuerzas armadas, no hay presencia estatal en Tumaco. Hay pocos fiscales, jueces o investigadores. Los civiles no tienen autoridades estatales a las que recurrir.

Los civiles se ven obligados a cumplir con los deseos de los disidentes, quienes los asustan amenazándolos y plantando minas terrestres cerca de donde viven. Los funcionarios del gobierno Colombiano pueden continuar reclamando que el acuerdo con las FARC finalmente ha logrado la paz, pero los grupos armados de Tumaco están demostrando que están equivocados.

(Los informes de Palau fueron posibles con el apoyo del Centro Pulitzer para Informes de Crisis)

mp/ag

Mariana Palau. Periodista independiente radicada en Bogotá.

* Artículo reproducido con el debido permiso de The New Humanitarian. The New Humanitarian no se hace responsable por la traducción. La traducción ha sido realizada por Francisco Luciani para Teología Hoy. *